

Los gigantes de la seguridad cargan contra la desregulación

I. de las Heras. Madrid

Las grandes empresas de la seguridad privada han hecho frente común con los sindicatos para denunciar el nuevo reglamento para el desempeño de las actividades del sector, cuyo borrador elaboró el anterior Gobierno y se encuentra ahora a la espera de su aprobación por el actual. Su publicación está en manos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El punto más controvertido del nuevo Reglamento de Seguridad Privada se refiere al transporte de fondos y depósitos de efectivo. El borrador permite a sociedades sin consideración de empresa de seguridad transportar fondos por hasta 215.000 euros y hacer depósitos por 25 millones de euros.

Prosegur y Loomis

Esta medida ha puesto en pie de guerra a Aproser, la asociación empresarial que integra a grupos como Prosegur, Securitas, Loomis, Ilunion, Trablisa o Eulen. Las empresas están de acuerdo con UGT, CCOO y USO en que esta medida supone la "completa desregulación del sector".

Dentro del transporte de fondos, Prosegur Cash y Loomis son las dos principales compañías en España. La primera, que cotiza en Bolsa y

Empresas ajenas a la seguridad podrán realizar depósitos por importe de hasta 25 millones de euros



Ángel Córdoba, presidente de Aproser.

que también gestiona efectivo, ingresó el año pasado 1.924 millones, un 11% más. La filial española de Loomis declara unos ingresos anuales de más de 135 millones.

Eduardo Cobos, secretario general de Aproser, considera que el futuro reglamento "promociona un servicio *low cost* de la seguridad en detrimento de la calidad". Las grandes empresas han venido denunciando en los últimos meses un fenómeno parecido, en este caso en las licitaciones públicas de servicios de vigilancia privada.

Las empresas y los sindicatos lanzaron su denuncia a través del Observatorio de la Seguridad Privada. También están molestos por no haber tenido ocasión de presentar sus alegaciones al borrador de reglamento. Sí reconocen que la nueva norma mejora la protección jurídica de los vigilantes al considerarlos "agente de autoridad", pero lo hace de forma "insuficiente".

IAG y Ryanair prevén un caos aéreo estival

QUEJA/ Las aerolíneas advierten del impacto de los retrasos y cancelaciones en el turismo por las huelgas en Francia.

Miquel Roig. Bruselas

"El problema va a empeorar antes de empezar a mejorar", aseguraba ayer Willie Walsh, consejero delegado del holding IAG (British Airways e Iberia), al ser preguntado por los 5.000 vuelos cancelados en lo que va de año por las huelgas de los controladores aéreos en Europa y que se están cebando con España en general y con Cataluña y Baleares en particular. "Llega el verano [...] y prevemos un impacto significativo en la economía española, donde el PIB del turismo supone el 11,6% y el 13% de los empleos". A su lado, mientras tanto, asentía Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair.

Los directivos de las dos compañías -222 millones de pasajeros al año- visitaron ayer Bruselas para entrevistarse con Violeta Bulc, comisaria de Transporte. Le pidieron que interviniera para proteger el derecho de libre circulación de los ciudadanos europeos y anunciaron que estaban considerando presentar una reclamación ante la Comisión Europea.

Walsh y O'Leary comparecieron ante la prensa junto con Thomas Reynaert, director general de Airlines 4 Europe, una asociación de aerolíneas europeas que aglutina el 70% del tráfico aéreo de pasajeros europeos. Se quejaron de la falta de recursos para el control aéreo en Alemania y



Willie Walsh, consejero delegado de IAG.



Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair.

RETRASOS

Al cerrarse un espacio aéreo regional de forma inesperada, los aviones tienen que dar rodeos, usan **más combustible** y van acumulando retrasos que, en muchas ocasiones, acaban obligando a **cancelar el último vuelo del día** de ese avión.

Reino Unido -que obliga a cancelar vuelos por cuestiones de capacidad- pero, sobre todo, de las huelgas de los controladores de Marsella, por cuyo espacio aéreo pasa

gran parte del tráfico que se dirige del norte de Europa al Mediterráneo. Los directivos se quejaron de que los servicios mínimos de esas huelgas priorizan el tráfico doméstico en Francia, pero dejan desatendidos los vuelos que deben sobrevolar su espacio aéreo, aunque tengan origen y destino fuera del país. Un 50% de los vuelos de Vueling, filial de IAG, dependen del espacio aéreo controlado desde Marsella. "Estas interrupciones son completamente inaceptables y hacemos un llamamiento a los Gobiernos y a la Comisión Europea para que actúen con urgencia", afirmó O'Leary.

Pero la comisaria europea aseguró que poco puede hacer en este problema y que la competencia para resolverlo

Walsh: "No entraré en la guerra de precios con Lufthansa"

Willie Walsh, consejero delegado de IAG, aseguró ayer que no va a "entrar en una guerra de precios" con Lufthansa por hacerse con Norwegian. IAG tiene casi un 5% de la escandinava y ha intentado adquirirla, pero la respuesta ha sido negativa. La compañía alemana dijo la semana pasada haber contactado con Norwegian. "Si quieren hacer una oferta superior a la valoración que nosotros damos a la compañía pueden hacerlo", dijo Walsh. "La operación [de comprar Norwegian] nos parece interesante, pero si alguien cree que la necesitamos o que la haremos a cualquier precio, se equivoca", zanjó.

recae en Francia. Una propuesta que lanzaron Walsh y O'Leary fue que Eurocontrol, el organismo que coordina el control de tráfico aéreo de 41 países, se hiciese cargo del control aéreo de los vuelos que operen por encima de 30.000 pies. Pero, para ello, hace falta el visto bueno de Francia.

A4E lleva meses hablando con el Gobierno y el Parlamento francés y le ha pedido un plan antes de que comience la temporada alta de verano, pero de momento no hay solución a la vista.

Walsh aseguró también que confía en que el Gobierno español les apoye para convencer a París de que busque una solución para los controladores aéreos franceses.

Local comercial en venta

Ubicado en una de las zonas más comerciales de Bilbao, la Plaza Moyúa. Este local prime cuenta con aproximadamente 750 m² de superficie.

El proceso de venta está dirigido a operadores, family offices e inversores privados.

Fecha límite para la presentación de ofertas: 4 de julio de 2018. Para más información:



Patrimonios Privados
patrimonios.privados@eu.jll.com
+34 91 789 11 00

